

Nº 13 Dic/23

NOTAS DE COYUNTURA
Diciembre 2023



PROLETARIA

Revista de debate y formación

ESCANEA EL CODIGO QR Y
VISITA NUESTRO SITIO WEB



www.centropraxis.co

centropensapraxis@gmail.com



@praxis_col



@centrodepensamientopraxis



Praxis



@centrodepensamientopraxis

Revista Proletaria número 13. Diciembre 2023

Producción, edición y diagramación:

Centro de Pensamiento y Teoría Crítica - Praxis



Contenido

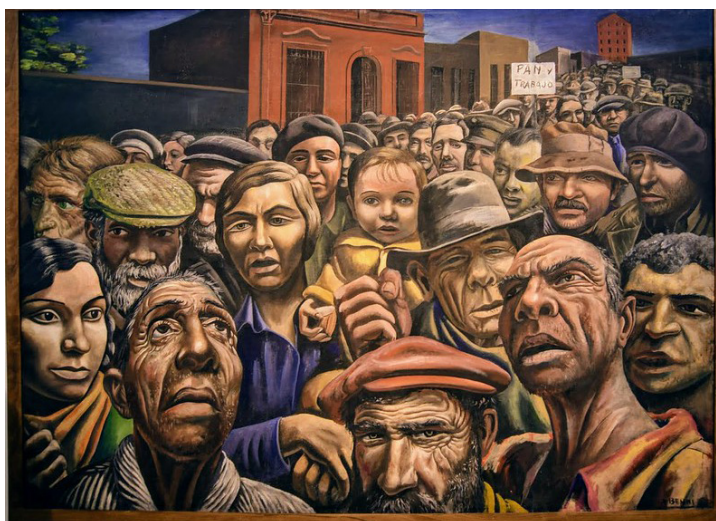


El regreso de las huelgas y la disputa por la justicia en solidaridad por Palestina

4

18

Un capitalismo regresivo y sin fórmula para relanzarse en América Latina



Urge retomar las Asambleas Populares

28

El regreso de las huelgas y la disputa por la justicia en solidaridad por Palestina

A bordamos aquí un somero balance de las condiciones en que se desenvuelven las luchas por superar al capitalismo a fines del 2023. Se destaca cómo en el marco de la depresión capitalista, el rebrote de las contradicciones, agudizadas por la inflación, han terminado por impulsar un ciclo de huelgas que tal vez no se presentaba desde los años ochenta, pero que ahora se entrecruza y potencia con las protestas en todo el planeta que reclaman justicia por Palestina. La lucha de clases se manifiesta mediante una batalla entre la asociación del capital y los gobiernos occidentales justificando la violencia y barbaridad a la que se le anteponen millones de manifestantes unidos por los principios de solidaridad y justicia. Por tanto, el regreso de las grandes huelgas de los trabajadores y las extendidas manifestaciones populares en defensa de Palestina son hechos sobresalientes en la actual coyuntura.

Esto sucede en un contexto donde persisten las dificultades para acumular capital, manifiestas en bajas tasas de crecimiento del producto bruto y la inversión, y en la falta de estrategias certeras para relanzar decididamente el ciclo de producción a nivel mundial. Estas condiciones derivan en un incremento de la rivalidad entre los estados capitalistas, bajo la forma de capitalismo occidental vs capitalismo oriental, contexto en el que EEUU ha logrado retomar la iniciativa de la hegemonía mundial.

Las dificultades que enfrenta el capitalismo para relanzar el ciclo de acumulación enfrentaron una especie de doble embate entre la pandemia y el posterior reinicio de la actividad productiva, patente en una persistente inflación. La pandemia del COVID favoreció la tendencia a desechar algunas de las políticas neoliberales de austeridad en el gasto público, y en su lugar los gobiernos pasaron a subsidiar la actividad de las empresas y su rentabilidad. Ese tipo de giro -inicialmente asumido por el gobierno de los EEUU y replicado inmediatamente por la mayoría

de gobiernos en el mundo- permitió que el gasto público sostuviese la actividad económica mediante compensaciones a los ingresos de las familias, y sobre todo con subsidios directos a las empresas.

Si bien las firmas capitalistas del mundo fueron sostenidas a flote, el costo enseguida se reportó como un persistente proceso inflacionario, que ha sido enfrentado mediante duras alzas en las tasas de interés en todo el mundo. En el caso de EEUU esa variable pasó del 0,25% al 5,25% entre diciembre de 2021 y julio de 2023, mientras que la Unión Europea -UE- las llevó del 0,50% hasta el 4,5% en el mismo periodo. Debido a que la causa principal radicaba en una contracción del lado de la producción, a la que se sumó un desbarajuste en las cadenas mundiales de comercio, las medidas resultaron poco efectivas y por el contrario han tendido a comprimir lo ingresos de los trabajadores y la producción mundial, permitiéndose que tan sólo ahora, al iniciar el cuarto trimestre de 2023, la inflación observada se esté atenuando en EEUU (3,2%) y la UE (2,9%).

Como se sabe, ese escenario tendió a complicarse con el inicio de la guerra en Ucrania (02/2022), en tanto se vio afectada la oferta mundial de cereales, petróleo y agro insumos. Además, los estados capitalistas, en especial los occidentales, asumieron la necesidad de incrementar sus gastos de armamento, de modo que alentaron aún más la tendencia inflacionaria al ejercer mayor presión fiscal. De esta manera se dificultó la potencial acción estatal en función de la recuperación del capital, tras el rebote sucedido en 2021, y por eso el crecimiento mundial nuevamente ha tendido a contraerse, esperándose este año un 3,0% frente al 3,5% de 2022.

Tasas de crecimiento del PIB, por periodos						
Periodo	EEUU	UE	China	Rusia	A.L.	Col
2019	2,5	1,6	6,1	2,0	0,7	3,2
2020	-2,2	-6,1	2,1	-2,7	-6,5	-7,3
2021	5,8	5,9	8,5	5,6	6,7	11,0
2022	1,9	3,4	3,0	-2,1	3,8	7,3
2023.1	1,7	0,1	4,5			3
2023.2	2,4	0,3	6,3			0,3
2023.3	4,9	-0,1	4,5			-0,3
2023e	2,0	0,6	5,0	1,2	1,7	1,3
2023e datos esperados						



Sin embargo, los resultados por grandes regiones del mundo difieren, en especial porque los EEUU han tenido la capacidad de manipular las contradicciones y ponerlas a su favor. La guerra en Ucrania le ha permitido sobrellevar su bajo crecimiento y evitar una muy esperada recesión en 2023, tanto que es probable que no sólo sobrepase el 1,4% proyectado a inicios de este año, sino que incluso supere el 2,0% a final de año. Esto pasa porque EEUU se beneficia de los altos precios de los combustibles, de agroinsumos y cereales, pero especialmente del incremento de la producción de armas dirigidas a sostener la guerra contra Rusia en Ucrania, y del nuevo frente en Palestina.

En principio, los trabajadores y en mucho menor medida los capitalistas de la UE son quienes están cargando con los mayores costos reales de la guerra en Ucrania. De un lado porque sus gobiernos han decidido destinar hasta 2% del PIB al gasto en armamento, y porque han tenido que enfrentar un contexto de altos precios de combustibles, que en su mayoría son importados. Por esto, la UE ha estado enfrentado el riesgo de una recesión técnica, esperándose que su crecimiento sea inferior al proyectado inicialmente. La instrumentalización de las contradicciones entre Ucrania y Rusia por parte de los EEUU no sólo han tenido como propósito someter aún más la UE, sino también afectar a sus opositores principales China y Rusia.

Como se sabe, Rusia se dejó arrastrar al conflicto abierto con Ucrania y en ese marco el costo de la guerra se contabiliza en dos frentes. De una parte, las sanciones económicas del capitalismo occidental en bloque, que le quitaron 350 mil millones de dólares de sus reservas externas, además del bloqueo a sus ventas y compras en el exterior, constriñendo la fuente principal de su ingreso, la venta de petróleo y gas. A ello se suman los altos costos de una campaña militar,



que ya es de largo aliento y por lo pronto no parece tener fin, en la cual los resultados le han sido muy esquivos, tanto que la necesidad de recurrir a tropas mercenarias condujo a problemas políticos internos, como el intento de Yevgeny Prigozhin -comandante de la fuerza Wagner- de derrumbar el gobierno de Putin, a mediados de este año. A pesar de ello, Rusia parece lograr estabilizar sus condiciones económicas internas y espera cerrar el año con un crecimiento positivo, mientras la apertura del frente de guerra sobre Palestina parece amortiguar la presión en el terreno de batalla, a los que se suma cierto cansancio de los gobiernos occidentales frente a la gestión de V. Zelensky, creciendo ahora las acusaciones de corrupción.

Por su parte la economía de China, que no sufrió el embate de 2019, vio afectado severamente su alto crecimiento en 2022, ante la persistencia de las políticas de encierro. A ello se agregó el ataque directo de los EEUU mediante la contracción de las importaciones chinas, base de su crecimiento, consolidada ya como una tendencia hacia una fractura del mercado mundial, y manifiesta en la agudización de la competencia en productos como los chips, autos eléctricos, o telefonía. A estos retos se suma, en el presente año, el incremento del riesgo financiero ante la crisis de la gran constructora Evergrande, proceso que no se ha terminado de decantar. Aun así, las políticas de gasto público y de sostenimiento de la demanda interna parecen funcionar, por lo pronto, en la medida que en este año se espera que vuelva a tener un crecimiento superior al 5%.

Brevemente, la competencia intercapitalista, tornada guerra comercial, cobra sus formas y sus estrategias. China y Rusia buscan fortalecer su posicionamiento como centros capitalistas alternativos y en consecuencia su discurso es el de la multipolaridad como alternativa a la unipolaridad de los EEUU. En



ese sentido, su estrategia se dirige a consolidar una fuerza capitalista alterna mediante la unidad de los BRICs, cumpliendo un particular papel la estrategia del “Cinturón y la Ruta” de la Seda, que conjunta una serie de proyectos de inversión en infraestructuras dirigido a agilizar el comercio con Europa, Sudeste Asiático, África y América Latina, iniciativa que recibió un nuevo impulso al celebrarse su décimo aniversario, a fines de octubre. Frente a esta proyección, el capital colectivo de occidente ha creado su competencia mediante el corredor India-Medio Oriente-UE, que pasa por Arabia y Jordania y tiene como nodales a los puertos de Haifa y el potencial canal Ben-Gurión, alternativo al del Suez, y en el que Palestina resulta sumamente incómodo, de allí una potencial razón para la guerra de aniquilamiento que han desatado Israel, EEUU y la UE, tal como lo describe un artículo de Marco del Pont (Rebelión, 13/11/23).

Por su parte, Biden implementa una estrategia, por ahora exitosa, de fraccionamiento del mercado mundial dirigida a comprimir y sitiar el impulso de China y su socio, Rusia. A diferencia del discurso neoliberal de un mundo globalizado bajo el libre comercio, lo que ahora se busca es renovar la división que existió en la llamada Guerra Fría, periodo en el cual los EEUU se proclamó como defensor del capitalismo, construyó una institucionalidad internacional que apalancó su hegemonía y sitió a los países que intentaron su avance al socialismo. En esta estrategia el impulso de la guerra, o cuando menos su fantasma, es vital, porque torna a los gobiernos de occidente más dóciles a las mezquinas necesidades del capital norteamericano.

Es por esto que los EEUU arrinconaron a Rusia hasta empujarla a la batalla militar en Ucrania, y en esa misma dirección alientan el choque de Taiwan con el gobierno de Beijín. Esta tendencia ha cobrado mayor fuerza en el informe de la Comisión



de Postura Estratégica del Congreso, de mediados de octubre, conformada por miembros de los dos partidos, en el que se recomienda ampliar las fuerzas convencionales y fortalecer alianzas a fin de estar preparados para conflictos simultáneos con Rusia y China. Aunque a mediano plazo una confrontación directa tenga mediana posibilidad, el informe cuando menos justifica el incremento del gasto militar y por esa vía ayuda a sostener el lánguido y contradictorio crecimiento en los EEUU.

Junto a ésta, otra de las alternativas para sostener el crecimiento capitalista es la de acelerar la renovación de las fuentes de energía —a las que se suma la obtención de hidrógeno blanco, y a partir de fuentes solares- que exige una profunda renovación del parque automotor e industrial en el mundo. Para ello, se ha desatado una fuerte campaña, que utiliza a fondo la terapia de choque, asegurando que el mundo se encuentra al borde del precipicio, o del mismo infierno, tal como lo expresa António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. El objetivo aquí es que los gobiernos destinen más subsidios a energías limpias y autos eléctricos, acelerándose la irracionalidad de chatarrizar más rápido y gastar más, con ello, se manipula el problema real y se lo reduce a una estrategia para sostener las alicaídas ganancias capitalistas.

De otra parte, el acelerado cambio en las tecnologías de computación e informática parecen no ser lo suficientemente fuerte para reimpulsar el capitalismo. Aunque el boom de la Inteligencia Artificial -IA- ha dado para sostener un incremento desde junio de las acciones de las grandes tecnológicas (Microsoft, X, Google, Amazon, Apple...), excepto X que perdió más de la mitad de su valor en bolsa en menos de un año al bajar de 49 mil a sólo 20 mil millones, no es suficiente para sostener el índice global de las acciones, al menos si se tiene en cuenta que el



Standard and Poors-500 cayó nuevamente desde julio, ello muy a pesar de los buenos resultados de la mayoría de empresas (cerca del 80%) en el tercer trimestre.

Entonces, las estrategias y políticas del capital en los EEUU parecen mostrar efectos positivos sólo en el corto plazo, por cuanto se mantiene un ritmo leve de crecimiento del empleo y del producto. Sin embargo, las dificultades de fondo apenas se están postergando, porque la deuda total sigue creciendo y se amplía con la política de altas tasas de interés. Con ello, el problema se traslada al costo de la deuda pública, debido a que la tasa de interés de los bonos del gobierno –ahora del 5%- ha superado el techo anterior a la crisis de 2008, siendo un efecto de esto que las carteras de los grandes fondos inversionistas se distorsionan por las señales contradictorias que se transmiten a los diversos mercados.

Así, por ejemplo, las altas tasas de interés permitieron que los grandes bancos de EEUU incrementaran sus beneficios en 4%, para un total de 22.500 millones en el tercer trimestre. En contrapartida, afectaron las ventas en vivienda hasta ser las más bajas desde 2008, pero contradictoriamente el sector de la construcción en vivienda se mantiene muy activo, siendo significativo el movimiento contrario entre los precios al alza de las acciones de las grandes tecnológicas mientras caen en las demás ramas industriales.

Es decir, la drástica política anti-inflacionaria sostiene y alimenta el capital, pero al costo de incrementar los riesgos. Por ejemplo, el fantasma de una crisis fiscal en los EEUU ha vuelto a despuntar ante el incremento del servicio de la deuda, -debido al peso que tiene, 32 billones de dólares, esto es más del 100% de su PIB anual- monto al que se podría agregar otro billón mediante emisión de bonos en el último trimestre. A



"El dolor de la Madre Teresa"
Xilografía
2008

ello se suma que el servicio de la deuda en pago de intereses pasará del 8% al 12% de los ingresos entre 2019 y 2028, según Gita Gopinath, vicedirectora gerente del FMI (Citado por M Roberts en artículo de revista Sin Permiso del 31/10/23).

Tal escenario trastoca la administración de las carteras de los fondos privados de ahorro e inversión, porque la tenencia de bonos del gobierno con su alta rentabilidad desestimula los precios de las acciones de las empresas industriales, que son las de mayor riesgo, dificultando las combinaciones que minimicen los riesgos. Así por ejemplo el holding Berkshire Hathaway, dirigido por Warren Buffet, ha preferido salir de acciones de empresas clave y colocar los recursos en bonos del gobierno logrando utilidades récord al finalizar octubre. Mientras el fondo soberano más grande del mundo, el noruego, se anotó una pérdida de 35 mil millones de dólares en el tercer trimestre de este año.

Esprecisamente este ambiente de incertidumbre y bajo crecimiento el que nutre la concentración de capital a nivel mundial. En octubre Chevron compró la petrolera Hess por 53 mil millones de dólares, adjudicándose la promisoria explotación en Guyana. Unos días antes Exxon realizó un movimiento comparable a cuando se fusionó con Mobil, al adquirir Pioneer Natural Resources por 60 mil millones de dólares, consolidando su posición como primer productor mundial. En el mismo mes VMware fue adquirida por Broadcom –productora de semiconductores- por valor de 69 mil millones de dólares, fortaleciendo su posicionamiento en tecnologías de la nube. Así mismo se espera la compra de la biotecnológica Seagen por Pfizer, por un valor de 43 mil millones de dólares. Estos ejemplos dan cuenta del gigantismo en las adquisiciones y la manera como está operando la competencia mundial.



Resumiendo, el gobierno de los EEUU ha implementado una serie de estrategias para sostener su maltrecha economía y recoge los frutos del corto plazo, aumentando los riesgos en el mediano. En particular la estrategia geopolítica de Biden le ha permitido recuperar parte del espacio perdido entre 2008 y 2016, hasta la guerra en Siria, de modo que su hegemonía se ha fortalecido con la guerra sobre Ucrania, e incluso saca partido del genocidio sobre los palestinos. Esto porque apoya a Israel -de hecho desde hace décadas ha sido la ficha del sionismo dentro del Partido Demócrata- y a la vez se pretende posicionar como mediador y pacificador de la región, a pesar de que en los hechos promueva una guerra regional al realizar bombardeos sobre Siria, sus empresas capitalistas de propaganda difundan que la amenaza de la región ya implica fuerzas en Líbano, Yemen, Irán y Siria. A la vez, ha logrado trasladar el impacto negativo de la crisis mundial a otras economías capitalistas, entre ellas las de Europa, China y Rusia, complicando de pasada el panorama de las más vulnerables y pequeñas, como las de Latinoamérica, donde la inflación y las alzas de interés han debido replicar las subas de los intereses en los EEUU, a fin de evitar una salida en estampida de los capitales externos ante menores tasas de retorno.

Y uno de los efectos en la persistencia de la inflación es la contracción del ingreso salarial de los trabajadores, agudizando la tendencia de largo plazo en la cual la masa salarial se reduce en la participación total de los ingresos. Así por ejemplo en países como Italia, Japón, México o Reino Unido, el salario real en 2022 fue más bajo que en 2008, según el informe de salarios de la OIT (2023), entidad que resalta cómo en las economías desarrolladas los salarios han avanzado a la zaga de la productividad laboral desde 1980. Esto ha desencadenado una serie de grandes huelgas, tal vez similares a las de inicios de



los años ochenta, cuando los gobiernos de Thatcher y Reagan impusieron la disciplina salarial mediante la fuerza.

En Inglaterra las huelgas han cubierto a las y los trabajadores de la salud, red de transporte público, universidades y servicios postales entre otros, exigiendo incrementos que permitan recuperar el nivel de ingreso salarial, así como condiciones de estabilidad, destacándose su persistencia, en forma intercalada, desde fines de 2022 hasta octubre, siendo posible su continuidad.

En Francia, las protestas contra el incremento en la edad de pensión afectaron a todo el país en enero y marzo, momento en el que los trabajadores del sector energético y portuarios colocaron en jaque la economía, siendo controlados mediante el autoritarismo impuesto por el gobierno de Macron. A pesar de ello en junio e inicios de octubre las protestas continuaron impactando en algunas principales ciudades francesas.

Así mismo, en abril, los trabajadores del sector ferroviario de Alemania paralizaron el tráfico, en Italia se presentaron huelgas en el sector de aviación en septiembre, en España a inicios de octubre las jornadas de protesta en el sector de la salud ya habían duplicado las del año anterior, mientras en Grecia las jornadas de marzo rebrotaron en una huelga nacional en septiembre, dirigida a impedir la flexibilización laboral contenida en una reforma legislativa.

La cantidad de huelgas y huelguistas en los EEUU han llevado a que algunos medios cataloguen a 2023 como el año de las huelgas, porque a fines de octubre los huelguistas superaban los 400 mil, más del triple de 2022. El año inició con la huelga del sector educativo en el distrito de los Ángeles que afectó a unos treinta mil trabajadores, luego se pueden resumir su impacto en renombradas empresas como Starbucks, Kelloggs,



industria cinematográfica, actores y libretistas de Hollywood (17.500 personas), o las trabajadoras de los casinos en las Vegas. En octubre, la huelga de trabajadores en Kaiser Permanente, en el sector de la salud, afectó a 39 hospitales que atienden a 13 millones de personas, y se salvó la compañía de correos UPS, que pactó con sus 340 mil empleados a último momento.

Entre ellas, la de mayor impacto ha sido la del sector automovilístico, dirigida por la Unión de Trabajadores de ese sector UAW, que cubre empresas como Ford, General Motors y Stellantis (Jeep, Dodge), con una paralización escalada durante de seis semanas, entre septiembre y octubre, y que cubre a más de 40 mil trabajadores. Algunos análisis presuponen una mejor posición de los asalariados para negociar en 2023, pero olvidan que la inflación ha sido la gota que rebosó el vaso de la contracción salarial aplicada en las décadas anteriores, mientras algunas de esas compañías vieron crecer sus beneficios. De aquí que entre las exigencias de la UAW se contemple un incremento de salario del 40% en los próximos cuatro años, mejoras para los temporales, y el paso a una jornada semanal de cuatro días, siendo recomendable el balance realizado en el artículo de Cassidy J, "lo que ganó el sindicato de la UAW", en la Revista Sin Permiso 12/11/10.

En lo que va corrido de noviembre la huelga más sobresaliente es la de los trabajadores textiles de Bangladesh, en la que durante quince días han sido asesinados cuatro trabajadores. La protesta surge ante la desactualización durante una década de los salarios, de modo que la patronal apenas ofrece un incremento del 25%, mientras que el gobierno ha decretado un 50%, cifras alejadas del objetivo de los trabajadores que es llevar el salario a 135 dólares mes -monto que resume la agudísima tasa de sobreexplotación que rige en 3500 fábricas que



producen para marcas como Levis, Zara, GAP, o Adidas-.

También es de resaltar la interconexión y continuidad entre las huelgas y las multitudinarias protestas en favor de Palestina mediante la respuesta positiva que han dado varios sindicatos al llamado de sabotear la entrega de armas a Israel, por lo que proletarios de los puertos en Bélgica y los estibadores de Barcelona se niegan a realizar labores para tal fin, mientras trabajadores de la UAW de EEUU, del Consejo Sindical Central de la India (AICCTU), de la CUT en Brasil, del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), y de Japón o Colombia se manifiestan solidarios al llamado.

La persistencia de la fase depresiva capitalista permite ahora expresar más claramente la lucha de clases en la que descansa, y en la cual el proletariado se ha lanzado a atenuar los niveles de su explotación. Sin embargo, esta realidad es ocultada por las empresas capitalistas de propaganda, lo que es comprensible, pero también es menospreciada por las fuerzas políticas de “izquierda” que han hecho de la disputa geopolítica su centro de gravedad, reduciendo su preocupación a promover una supuesta multipolaridad que competiría con la unipolaridad imperialista. Tal posición pierde de vista la hegemonía real del capital sobre todo el planeta, relación social que se estructura mediante una agría disputa entre empresas y estados capitalistas, bajo los cuales se jerarquiza, sostiene y agudiza la explotación del proletariado. Estos sectores de “izquierda” parecen más preocupados por los intereses de los capitales locales, que de las necesidades conjuntas de los proletarios.

Lo anterior es importante considerarlo de cara al problema entre Palestina e Israel. En principio porque explican la necesidad de discursos tendientes a crear el sentimiento y mito de la identidad nacional por medio



del cual se divide y contiene al proletariado. En ese contexto son manipulados el sentimiento y tradición religiosa, hasta un punto en el que la carga genera un alto potencial de riesgo, que es mayor cuando los estados se acercan a formas etnocráticas- Israel- o teocráticas al sumar la religión y el mito de la identidad nacional, generando diferencias fundamentalistas que resultan de fácil manipulación extremista.

Un ejemplo claro de ello es cómo el gran capital de origen judío logró que Inglaterra y los EEUU apoyaran la artificial creación del estado-nación sionista en tierras de lo que ahora es Palestina (1948). De este modo, el capital inglés y norteamericano, ya interconectado por el capital financiero de origen judío, buscó exculpar su anuencia al rearme de Hitler y su culpabilidad directa en el exterminio de judíos a manos del fascismo alemán. Sin embargo, recurrieron a mitos milenarios como fuentes de justificación para expropiar esos grandes territorios, peligrosa manera de proceder que echa por tierra los supuestos fundamentos liberales de la modernidad burguesa, entre ellos la base del derecho moderno, constituyendo así una condición que ayuda a explicar la barbaridad e incondicionalidad con la que se ataca a la población palestina.

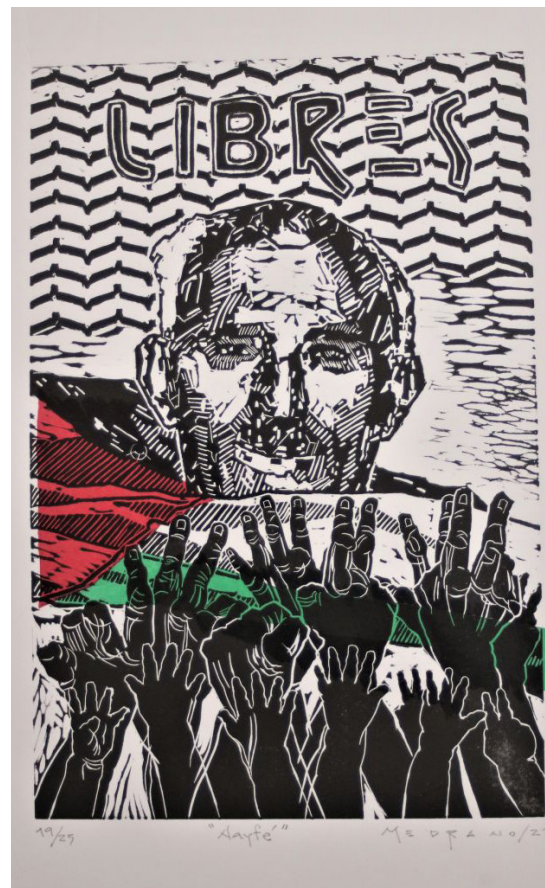
Hay que recordar que en la alta jerarquía del capital se encuentra el de origen judío, como sucede con el fondo Black Rock, que domina las bolsas, corporaciones mundiales y gobiernos del mundo. Ello ayuda a explicar por qué ya desde antes de 1948 las empresas del gran capital, sus estados y sus grandes cadenas de propaganda, han justificado el sistemático genocidio sobre el pueblo palestino, siendo uno de los resultados la continua reducción de su espacio geográfico vital. Por tanto, hay que diferenciar entre la población que se reconoce como judía-una parte de la cual no es sionista e incluso se



ha opuesto al genocidio de los palestinos-, respecto de los grandes capitalistas sionistas.

En este contexto, la incursión militar del pasado siete de octubre realizada por una coalición de grupos de resistencia palestinos, y que los medios adjudican en exclusiva al grupo fundamentalista Hamas, es una respuesta de un pueblo arrinconado hasta el extremo. El que esta acción militar no pudiera ser anticipada por uno de los ejércitos más desarrollados del mundo y con mayor capacidad de inteligencia militar, ha dado pie para sospechar de un plan similar al ejecutado en septiembre de 2002 en los EEUU, en tanto ahora es usado para intensificar el exterminio de los palestinos, mediante el bombardeo indiscriminado que transgrede hasta las más básicas leyes de guerra. Y de la cual las cifras de víctimas contabilizan ya un millón de personas en el destierro, cerca de doce mil asesinados, la mayoría niños y mujeres, otras dos decenas de miles en heridos, y otras tantas decenas de miles que han perdido sus escasos medios de vida, por la destrucción de las exiguas infraestructuras productivas y de vida, como son hospitales, escuelas, comercios, vías y fábricas.

En este contexto, la lucha de clases en el mundo cobra una forma particular en la que se pone en juego criterios elementales de justicia. De un lado se ha situado, con todo el descaro, el gran capital, sus asquerosas cadenas de propaganda, los arrodillados gobiernos del mundo, y las supuestas instituciones internacionales. Del otro, los trabajadores, quienes han pasado también a movilizarse por cientos de millares en la mayoría de grandes ciudades del mundo, reclamando protección y justicia para la población palestina. Con ello, frente a la explotación, sometimiento e injusticia, los trabajadores del mundo unidos dan muestras prácticas sobre cómo pueden constituirse en la alternativa internacional que permitirá superar el poder del capital.//



Un capitalismo regresivo y sin fórmula para relanzarse en América Latina

Continuamos las notas sobre coyuntura considerando que la dinámica de Latinoamérica es la de una región de estados capitalistas que no logra fórmulas alternativas para siquiera mejorar su degradada posición en el mercado mundial. Esto se ha traducido en una severa crisis democrática que se expresa en una iteración entre gobiernos de centro-izquierda -o progresistas- y de ultraderecha, en medio de la cual las condiciones de vida del proletariado y demás sectores populares sólo empeoran. Y en este contexto, la constitución de alternativas transformadoras de talante proletario se dificulta, cuando no se obstruyen, porque la acción política de la izquierda tiende a circunscribirse a los ámbitos institucionales que fija la limitada democracia representativa.

En forma similar a lo que sucede en otras regiones del mundo, el crecimiento de Latinoamérica ha vuelto a frenarse, y en 2023 apenas se espera una tasa del 1,7%. En realidad, las dificultades son crecientes desde fines de 2014 cuando los precios de las materias primas se descolgaron, de modo que el ciclo de recuperación de los precios internacionales, entre 2021 y 2023, no ha operado con la misma fuerza que en el periodo 2003-2014. Esto se ha traducido en crecientes dificultades para la estabilidad política, en la medida que los gobiernos cuentan con menores ingresos para sostener la rentabilidad del capital y financiar programas sociales.

Aun así, durante el último año se han estabilizado los gobiernos de Brasil -tras la victoria de Lula contra Bolsonaro-, y de Perú -tras el golpe de la derecha con Boluarte-, muy a pesar de que su economía está en franca recesión. La forzosa salida de Guillermo Lasso en Ecuador condujo a un proceso electoral traumático y violento, en el que se enfrentaron fuerzas del progresismo correista y la derecha, representada por el hijo de uno de los capitalistas más grandes de ese país, Daniel Noboa, finalmente ganador. Además, en el escenario están de por medio las elecciones de este 19 de noviembre en Argentina, país que refleja las condiciones

generales en las que se mueve el capitalismo y las fuerzas políticas en América Latina, de aquí que nos centremos en este caso ilustrativo.

En la disputa electoral a segunda vuelta han quedado Javier Milei, un anarquista de ultraderecha que promete entregarle el país al libre mercado, y Sergio Massa el candidato de la franja derecha del peronismo-kirchnerista, quien propone mantener los ajustes recomendados por el FMI, pero también algunos programas de subsidios a la población, junto con cierto papel preponderante del Estado. Esto significa que las diferentes fracciones del proletariado enfrentarán iguales o peores condiciones de vida en los años venideros, porque los ajustes siempre implican menos empleo, reducciones salariales y peores condiciones de vida. Por su parte, la izquierda -en sus diferentes agrupaciones- se enfrenta a la decisión de cómo enfrentar el escenario, de aquí que una fracción se inclina por acompañar al peronismo por su margen de izquierda, bajo la imperiosa consigna de salvar la democracia, tal como lo plantea C. Katz (artículo en Rebelión 28/10/23) -línea que movilizó Lula en la pasada contienda electoral-, mientras otras menos numerosas parecen menos dadas a esa contienda, moviéndose entre la abstención y el voto en blanco, al comprender que tanto con Milei, como con Massa, el proletariado resultará más afectado.

Por tanto, sólo muy en la apariencia la contienda se sucede entre progresismo y derecha, forma bajo la cual se presenta la crisis en América Latina. Este forcejeo sucede tras dos décadas de dominio mayoritario del progresismo-kirchnerista -salvo 2016-2019 en que gobernó Macri- que dejan nuevamente a la sociedad argentina envuelta en una especie de crisis general, similar a la sucedida a inicios de siglo, cuando inflación, devaluación, desempleo y la crisis económica generalizada fueron entendidos como los mejores resultados de las políticas neoliberales.



Bajo tales condiciones se abrió paso el peronismo-kirchnerista, una reedición del nacionalismo proteccionista industrial, que entre 2003 y 2015 pareció darle un giro total a la situación, al regresar el crecimiento y suavizar los niveles de desempleo. En realidad, el peronismo-kirchnerista pudo emerger en la crisis y pasar a administrar el ciclo de bonanza primario-exportadora sucedida entre 2003 y 2011, de allí que sus primeros resultados se pudieron presentar como si se tratara de un logro de fondo. En forma sintética, la crisis había devaluado capitales y salarios y generado condiciones para un nuevo ciclo, viéndose éste favorecido por la recuperación de la demanda mundial y los altos precios de las materias primas. Con ello, el peso se revaluó, se controló la deuda externa y parte de la inversión externa regresó, de modo que el gobierno contó con más recursos y pudo incrementar los subsidios al capital interno y sus programas sociales de gasto, dando por resultado el ciclo de crecimiento entre 2003-2011.



Sin embargo, hacia 2012 ya se presentaban signos de contracción, siendo claro que el crecimiento era apenas un fruto pasajero. Lo cierto fue que la estructura productiva heredada de las décadas anteriores en poco fue modificada, por tanto, continuó basada en una vinculación subordinada al capital externo por la vía de las exportaciones primarias – que aún en 2022 pesan el 40% del total-. Mientras, la industria manufacturera sólo ganó un 1% en el total del PIB entre 1998-2011, al rondar el 18%, mientras minas y agricultura ganaron casi seis puntos en el PIB (Astarita, Blog, 13/08/12).

Bajo estas condiciones, cuando los precios internacionales de las materias primas se contrajeron desde 2012, la economía entró en una nueva depresión, que se profundizó en 2020 y se extiende hasta la fecha. Como las condiciones estructurales no variaron de fondo, la nueva crisis pasó a manifestarse

como una decepción para las masas proletarias que habían sido encaminadas detrás de las promesas del peronismo-kirchnerista, aguardando cambios sustantivos que no se hicieron, ni eran posibles bajo tales políticas. Es por esto, que ahora se les pretende empujar hacia una encrucijada espuria, en tanto buena parte de las dirigencias de izquierda limitan el debate a si deben o no apoyar al actual candidato Massa.

El problema de la vinculación subordinada al capital mundial mediante exportaciones primarias pareciera ser menos grave para la Argentina (40% del total), que respecto de Chile (60%), o Colombia (70%). Sin embargo, las de los dos últimos países se concentran hasta cerca del 50% en el sector minero, mientras que las del primero se asocian a la agro-industria, razón por la cual las sensibles variaciones de precios y volúmenes se extienden con mayor intensidad por toda su economía. Es por esto, que la contracción de los precios de las materias primas entre 2012-2020 resultó en una depresión entre 2012 y 2019 en Argentina, mientras en los otros dos países apenas se ralentizó el crecimiento en el mismo periodo, contexto en el que el tipo de política aplicada se convierte en un diferenciador importante.

Sin embargo, el problema sustantivo del capitalismo argentino -como el del resto de América latina- estriba en una estructura industrial, basada en manufacturas básicas, que no se renueva sustancialmente desde los ochenta y por eso pierde posicionamiento a nivel mundial. Esto ha hecho que la industria interna dependa de altas tasas de explotación laboral y de subsidios estatales, que a la postre el Estado succiona de la renta que generan los productos primarios – en el caso de Colombia petróleo, café y coca-. Por esto, cuando los precios internacionales van al alza la economía se dinamiza porque se fortalece la moneda nacional, se facilita y acelera la importación



de maquinaria, se anima el empleo, crece la demanda interna y las cosas parecen camino a la plétora; sin embargo, las cosas pueden tornarse inversas una vez aflojan esos precios.

En el caso de Argentina, los precios de los productos que exporta –carne, soya, maíz y aceites vegetales- cayeron desde 2012, y la recuperación de 2020-2022 resultó insuficiente para cubrir los déficit fiscal y de comercio exterior -causados en el quinquenio anterior, pero que fueron incrementados por el manejo de la deuda entre 2012 y 2018-, con lo cual la tasa de crecimiento del PIB presentó una caída sistemática desde 2012, siendo del -2,2% en 2019, y profundizándose en 2020 con la pandemia (todos los datos referenciados tienen por base las estadísticas de la Cepal).



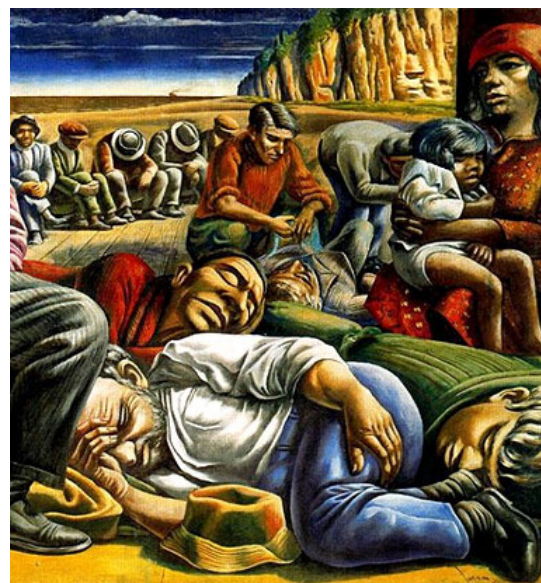
La sensibilidad de la economía Argentina a las variaciones del sector externo se puede apreciar en forma comparativa. Por ejemplo, su índice de exportaciones -base 1980- perdió 14 puntos entre 2012 y 2018, algo similar a lo que cayó el de Colombia, entre 2016 y 2020, país que apenas vio suavizado su crecimiento. Una manifestación del impacto de esa contracción del sector externo es que la inversión entre 2012 y 2022 (formación bruta de capital) retuvo su tasa de crecimiento en 16%, en promedio, mientras esa variable fue del 21,3% en Colombia, o del 25,5% en Chile. Vale anotar que la inversión en Argentina ha sido menor a la de los otros dos países, aún en el periodo del auge entre 2003-2010, siendo ésta una razón de la exigua variación de su estructura productiva, a la que antes nos referimos.

La caída desde 2012 en los ingresos de las exportaciones argentinas condujo a un déficit sistemático y creciente en su comercio exterior, manifiesto en su cuenta corriente de la balanza de pagos hasta 2018, cuando la cifra porcentual fue del -5%. Este movimiento se acompañó de una contracción de la inversión extranjera directa, que reversó en 2016 a niveles de 2002. Bajo tales condiciones, la reacción del segundo gobierno de Cristina Kirchner fue la de mantener artificialmente alta la tasa de cambio, mediante la activación de la demanda

vía gasto y déficit público y el incremento de la deuda pública interna y externa. El resultado fue que los precios internos empezaron a crecer –inflación-, se presionó la tasa de cambio, terminándose por impulsar las presiones circulares entre inflación y devaluación, circuito vicioso que empuja más la salida de capital y la inclinación a manejar la situación mediante el incremento de la deuda.

Estas dificultades económicas jugaron en favor del cambio de gobierno hacia la ultraderecha con Macri a fines de 2015, quien prometió la corrección y el regreso del crecimiento. Más sin embargo, sólo empeoró las cosas, porque los déficit fiscales que eran menores al -2,5% del PIB, fueron llevados en 2018 a promedios del -5.5%, momento en que las cosas eran gravosas porque el déficit en cuenta corriente era del -5% del PIB. Así las cosas, la deuda total del gobierno -que era cercana al 50% respecto del PIB- fue llevada a extremos inmanejables del 90% en 2019, e impulsada a más del 100% en 2020, por el inexplicable e ilegal préstamo del FMI de 50 mil millones de dólares en 2018. En tal encrucijada, era apenas evidente que el valor tanto del peso como del capital acumulado se debían depreciar, de allí que los recursos del préstamo del FMI entraron virtualmente al país, permitiendo que la burguesía salvara parte del valor de su capital acumulado, al apropiarse los dólares y sacarlos inmediatamente al extranjero.

Bajo tal escenario, era esperable que el regreso del peronismo con Alberto Fernández, a fines de 2019, ya no mostrará el talante progresista del ciclo 2003-2012. Es por eso que la fórmula Cristina-Fernández explícitamente se comprometió con el FMI a honrar y pagar la deuda, es decir a aplicar ajustes tanto en los salarios, como en el gasto público, para generar los ahorros con los cuales se alimenta el pago al capital financiero. De ese modo, las distintas fracciones del proletariado están pagando los efectos de una crisis mal administrada, que elevó el desempleo del 6% hasta el 12% -entre 2015 y 2020-, y de una deuda pública que le permitió al gran capital salvar el valor de sus activos, proceder que agravó la devaluación real del peso y castigó los salarios en cerca del 44%, respecto de 2016 (M. Hernández, artículo



Rebelión 13/11/23), debido a una inflación incontrolable que en octubre de este año llegó al 142% en su valor interanual.

Durante los últimos cuatro años de gobierno peronista las condiciones han variado bastante poco. El déficit en cuenta corriente se ha corregido debido al incremento de los precios de las materias primas, pero el déficit del gobierno se mantiene en el orden del -5%, mientras su deuda total –interna y externa- se mantiene aún en el 85% del PIB. Por eso permanecen las presiones sobre la tasa de cambio y las dificultades se manifiestan en permanente inflación. En tal escenario, tanto Milei como Massa están comprometidos en mantener las políticas de ajuste, a fin de sostener la rentabilidad del capital interno y pagarle al capital externo, lo que implica seguir golpeando los ingresos de los proletarios.

No obstante, en el campo de la política electoral las cosas se presentan como si se tratara de dos visiones antagónicas, y de esa manera el proletariado resulta manipulado respecto de sus condiciones y necesidades reales.

En tal juego, a la ultraderecha y sus empresas de propaganda les viene bien una mirada superficial y miope, en la cual la causa de la crisis serían las políticas de gasto público de los gobiernos kirchneristas. Esto es aprovechado al máximo por el ultraderechista Milei, quien en sus actos circenses combina machismo, xenofobia, racismo, odio a la izquierda, promete acabar la corrupción y recuperar la seguridad al echar por tierra la mayor parte de las instituciones del Estado, incluido el Banco Central, para que renazca un capitalismo impoluto de asperezas estatales, esperpento que sólo existe en los fantasiosos libros de texto de la economía neoclásica. Tal es su extremismo que ha terminado por asustar al mismo capital internacional y nacional, de allí que sus instituciones y medios propagandísticos hayan pasado de alentarle a contenerlo, y por tal razón en plena recta final han saltado en su defensa y promoción personajes ultraconservadores y reaccionarios - Vargas Llosa, Mauricio Macri, Mariano Rajoy, Sebastián Piñera, Andrés



Pastrana o Iván Duque-, alegando a coro la defensa de la libertad y la propiedad privada, ello ante una potencial victoria de Masa.

Mientras, desde el campo peronista de derecha, Massa -actual ministro de hacienda- recusa a unas inexistentes políticas neoliberales como las generadoras de los problemas, velando su compromiso abierto con el capital. De aquí que en sus propuestas programática considere central el incremento de las exportaciones, lo que significa continuar con el extractivismo y la primarización de la producción sobre la base de incrementar la explotación proletaria. Con eso, se ocultan las limitaciones estructurales que enfrenta el capital, sostenido en una estructura productiva en franca regresión, que no se renueva y más bien continúa rezagándose frente a los cambios tecnológicos y del mercado internacional, razón por la cual se vincula en forma cada vez más subordinada, mediante la oferta de materias primas con poca transformación y siendo por ello muy sensible a las variaciones internacionales de precios. Además, se pretende esconder que el problema fue evadido por las políticas del populismo, que se dirigieron fundamentalmente a aprovechar el ciclo de altos precios internacionales para apaciguar y desmovilizar a las masas proletarias, propagando la ilusión que “de a poco” el capitalismo se modera, se administra y cambia. De allí que una de las grandes herencias del kirchnerismo sea la desmovilización de las masas proletarias.

En resumen, la realidad de Argentina muestra que el capitalismo en Latinoamérica sufre de problemas estructurales que no pueden ser enfrentados con variaciones o combinaciones de las políticas tradicionales: monetaria, fiscal, tributaria y bajos salarios. El grave y creciente atraso de la estructura productiva señala que incluso la misma burguesía y sus representantes políticos no saben qué hacer o cómo enfrentar los problemas de la sociedad, y que por tanto se encuentran sin formula real de cómo relanzar la base de su degradado y regresivo sistema capitalista. Y esta imposibilidad hace que la misma burguesía sea una fuerza política altamente



retrograda que impide dar pasos adelante en busca de la solución, de ahí que la política electoral y la democracia representativa sistemáticamente se muestren más incapaces de solución, pero a la vez más irascibles e irracionales, contexto en que la tontería y el exabrupto cobran validez, como sucede con Milei.

El problema es que una buena parte de la izquierda en Argentina comprende estos problemas, saben claramente que la crisis actual del capitalismo no es administrable -baste visitar las páginas, periódicos y revistas de sus diversas organizaciones-. Pero ante las dificultades y lo exigente que es promover una política verdaderamente proletaria, prefieren reducir los debates a lo posible, y lo posible es actuar en los límites de la democracia representativa. De ahí que prefieran auto-limitarse a las elecciones, constriñendo otras formas de construcción y acción, y planteando que la decisión clave estriba entre ausentarse del debate electoral o aliarse con un ala del peronismo-kirchnerista a fin de defender la democracia, consigna con la que Lula regresó al gobierno. Sin embargo, la cuestión es, ¿para qué la democraciarepresentativa, si ella sólo sirve para que el capital continúe golpeando las condiciones de vida del proletariado y se impida su organización como clase con intenciones transformadoras?



Generalizando, entonces, dos décadas de gobiernos progresistas en América Latina no han redundado en fortalecimiento del proyecto de transformación estructural orientado a ir más allá del capital. Por el contrario, el castigo sobre el proletariado se mantiene o empeora, mientras la burguesía y sus representantes sólo atinan a aplicar políticas incapaces de relanzar el capitalismo e impedir la reversión de la estructura productiva. Y entre tanto, permiten, eso sí, que se mantenga el enriquecimiento rápido de una pequeña fracción burguesa, que sabe beneficiarse de la especulación y de la liquidación del capital acumulado durante más de un siglo de explotación sobre los trabajadores.

Con ello, la alargada crisis capitalista asume formas de un escenario en descomposición en el que la disputa

iterativa entre “progresismo” y ultraderecha termina por cercar y limitar la potencial acción de la izquierda y los movimientos sociales, reproduciendo así su posición de minoría política. Allí el viejo uso del miedo juega un papel vital, así por ejemplo en Argentina la ultraderecha se vale del discurso anticomunista y del diablo de la estatización y su defensa de la libertad para atacar las posiciones peronistas, mientras el pseudo-progresismo se vale del discurso del regreso del fascismo y la dictadura anidada en Milei a fin de defender la democracia. Con ello, el proletariado puede elegir, pero su elección se limita a escoger entre muy malo y malísimo, rango de libertad que denota a plenitud el contenido de la democracia para el proletariado, bajo las actuales condiciones.

En tal sentido, la crisis estructural del capitalismo acarrea crecientes dificultades sobre la limitada democracia burguesa representativa, la que debido a la profundidad de los problemas resulta incapacitada para contener y regular las contradicciones de la sociedad y en particular el descontento de las poblaciones, situación que torna más urgente el desarrollo de las fuerzas organizadas del proletariado que se capaciten para avanzar hacia transformaciones sociales de fondo.

Estas condiciones contradictorias son las que de cuando en cuando revientan en una u otra esquina de Latinoamérica, tal como acaba de suceder en Panamá. Allí los trabajadores y la población en general han vuelto a renovar las protestas del año pasado en agosto contra el gobierno de Laurentino Cortizo, mediante unas jornadas contra la Ley de minería que van a cumplir un mes, en medio del llamado a paro para este 16 de noviembre. Esas luchas estallaron con el fin de reversar la entrega de una explotación minera de cobre a la filial panameña de la canadiense Firts Quantumm, cesión dada mediante un contrato exprés firmado en tres días, que, aunque mejoraba en diez veces los ingresos recibidos en un contrato anterior de 2017, sólo garantiza beneficios al gran capital, mientras al pueblo panameño le queda la degradación medioambiental.//



Urge retomar las Asambleas Populares

Avanzamos con las notas sobre coyuntura pasando del contexto de mediano plazo que hemos presentado para Argentina y considerando más en corto el caso de Colombia. Aquí, con sólo un año de gobierno, el progresismo enfrenta importantes aprietos, en particular tras el revés electoral en los comicios a gobernaciones y alcaldías a fines de octubre, y por la inesperada contracción del crecimiento del PIB en -0,3% en el tercer trimestre de 2023, condiciones que están modificando el panorama político y abren interrogantes tanto sobre el futuro próximo de la política oficial, como de la potencial actuación desde el lado proletario y popular.

En forma breve se puede afirmar que el gobierno progresista enfrenta un agotamiento prematuro, en buena medida fruto de la política de cerco que han desarrollado el capital y sus agentes. Tal estrategia significa que, cuando menos desde lo electoral, el país está siendo reencarrilado por los viejos cauces de ultraconservadurismo y ultraderecha. Es así que el gobierno luce desgastado y sitiado, y por lo pronto privilegia acercamientos con la ultraderecha y los dueños del capital, antes que fortalecer una agenda que priorice las posiciones del movimiento social y la izquierda, a juzgar por las reuniones próximas con Uribe y los cacahos –los verdaderos dueños del país. Estos hechos muestran cambios en las tendencias y generan una especie de pregunta sobre cómo y hacia dónde proyectar el avance de las fuerzas proletarias y populares, planteándose aquí la necesidad de retomar la proyección de las luchas de 2019 y 2021 mediante la renovación y fortalecimiento de las asambleas populares en todo el país.

El duro revés electoral del partido de gobierno estuvo asociado a una estrategia sistemática de desgaste y desprestigio. En ella se pueden identificar cuatro ejes de ataque: la contracción económica de los últimos tres trimestres; el supuesto carácter regresivo y hasta peligroso de las reformas sociales que se tramitan en el Congreso; los errores y limitaciones propios en su capacidad de gestión de gobierno; y la supuesta entrada de dineros de la mafia a la campaña presidencial, en la que resulta muy comprometido uno de sus hijos. En esa estrategia actúan conjuntamente el gran capital desde sus gremios y empresas capitalistas de comunicación (Caracol, RCN,

El Tiempo...), los partidos de la derecha y ultraderecha, y sus fichas ancladas en las instituciones del Estado -en particular: procuraduría, fiscalía, Congreso, y Cortes-, logrando, por ahora, cercar y mantener en cintura al Presidente y su partido.

1. ¿Hacia la recesión económica?

Empecemos por la contracción económica manifiesta en la caída de la tasa de crecimiento del PIB trimestral. Éste empieza a contraerse desde la mitad del año 2022, cayendo de un promedio del 10,4%, en los cinco trimestres anteriores, a 2%, 03% y -0,3% en tres primeros trimestres de 2023, habiendo sido inesperada la última cifra negativa. A partir de ella, se puede colocar en duda el esperado crecimiento del 1,3% para todo el año. Y esto ya ha dado para conjeturar sobre una eventual recesión técnica (dos trimestres en negativo), la que parece poco probable teniendo en cuenta que el cuarto trimestre del año suele ser de mayor crecimiento debido al pago de primas e incremento de las ventas.

El producto interno refleja la contracción de sectores como el industrial y construcción, que ya se venían contrayendo desde inicios de año. Así ya lo reflejó el Índice de Seguimiento de la Economía-ISE en junio que fue de sólo 1% en junio, de modo que la producción industrial fue de apenas el 0,4% en marzo, desplomándose consecutivamente hasta el -8.6% en agosto y -6,9% en octubre. Algo similar sucede con la construcción, sector altamente dependiente de los subsidios y contratos del gobierno, que cayó -8.0% en ese mismo mes, aunque las ventas en vivienda están a la baja desde mediados del 2021, y Camacol reportó que en lo corrido hasta agosto de 2022 se dejaron de vender 92 mil unidades.

Una de las razones de esta contracción se encuentra en el impresionante apretón en la tasa de intermediación financiera del Banco de la República-BR, que saltó del 2% a fines de 2021 hasta el 13,25% en febrero de este año, superando con creces su anterior pico del 8% en junio de 2016. El fin real de esa medida ha sido compensar la rentabilidad del capital financiero ante los incrementos en las tasas de interés en EEUU y evitar





su salida abrupta, aun cuando también funcione como mecanismo para encarecer y contraer la demanda agregada. Es por esto que, no sólo ha caído el consumo interno y las importaciones, sino también, y en forma abrupta, la inversión (formación bruta de capital), que llegó al -22,2% en el segundo trimestre de este año, y nuevamente -11% en el tercer trimestre, datos sólo comprobables con el extraordinario periodo de la pandemia.

Sin embargo, a lo anterior hay que sumar la descolgada en las exportaciones, que en los últimos tres trimestres han crecido, en promedio, sólo al 1,5%, mientras en los cinco trimestres que les antecedieron avanzaron al 25.6%. Esa contracción está explicada por la baja en las exportaciones tradicionales (café, carbón, petróleo) y es cercana al 30% respecto del promedio en el primer semestre de 2022. A esta situación se agrega la apreciación del peso respecto del dólar, cercana al 20% en el último año, que implica menores ingresos para los exportadores.

Para decirlo en forma breve, la Junta del Banco de la República-BR es quién afecta la evolución de la economía, al practicar la fe ciega de perseguir las señales del mercado, es decir, de moverse al ritmo que impone el capital. Así, con su varita mágica de la tasa de interés comprimió la inversión, afectó las importaciones y por eso el déficit externo se redujo a la mitad de lo que fue en 2022. Con ello también impuso un ajuste al consumo interno y a las deudas, manifiesto en la contracción del monto total de la cartera del sistema financiero. Pero esa misma política ha implicado una afección de la liquidez en un periodo en que el costo del servicio de la deuda se eleva ante el alza de las tasas de interés, razón por la cual la cartera morosa en el último año saltó de 23,3 billones a 33.2 billones, anuncio fuerte para 2024, tanto para las empresas y familias endeudadas, porque generalmente comporta riesgos de quiebra.

Por tanto, el BR favoreció el arribo de la inversión extranjera directa, que en 2022 llegó a 17 mil millones de dólares. A ese monto se sumó el regreso de una parte de los ahorros de las pensiones que estaban en el extranjero, y esto ayuda a explicar el sostenimiento de la balanza de pagos y la revaluación del peso. Ello muestra

como en el país tiene más poder real la Junta directiva del BR que el mismo Gobierno Nacional, quien apenas ha podido entrar a corregir en este año el creciente déficit fiscal heredado del gobierno anterior.

Ahora bien, si elevamos la mirada hacia el ciclo de mediano plazo, lo que se observa es que el crecimiento del PIB empezó a contraerse desde 2012, cayendo del 6,9% al 1,4% entre 2012 y 2019, descolgada asociada a la reducción de los precios de las materias primas, como en el resto de Latinoamérica, con lo cual la inversión agregada (formación bruta de capital) perdió su anterior ritmo y se aplanó desde 2013, si se la mira desde su índice de crecimiento con base en 2002.

De este modo, el alto crecimiento que presentaron los indicadores económicos tras la pandemia sólo manifiestan un efecto estadístico, tras la profunda caída de los datos en 2020 y su posterior recuperación. Esto significa que la producción agregada apenas a fines de 2022 logró recuperar los niveles absolutos que tenía en 2019, punto al que hasta ahora converge el desempleo, en su medida oficial, que en este septiembre se vuelve a ubicar en 9,3%. De aquí que la mano del Gobierno Nacional se nota poco, a no ser por su limitada ejecución del presupuesto público, que efectivamente afecta a sectores presupuesto-dependientes e importantes como es construcción de infraestructuras y vivienda, razón por la cual las constructoras, filiales de los grandes grupos económicos, están implorando al gobierno la entrega de los acostumbrados subsidios con los cuales mantienen su demanda y sus mezquinas ganancias.

Esto nos lleva al punto sobre la gestión desempeñada en un año de gobierno progresista, del que se había especulado bastante. En primera instancia, el cambio de mando no resultó traumático para el capital, como lo vaticinaron los sectores más recalcitrantes, que por ejemplo esperaban una estampida del capital externo, al estilo de Marbel, y el desplome de la economía. El capital de los grandes grupos ha sabido suavizar los efectos, por eso los partidos de la U y Liberal se encargaron de acompañar al gobierno, permitiendo una transición suave y controlada.





Tal vez por ello, el gobierno se sintió con fuerzas para tramitar un ambicioso conjunto de reformas sociales de un solo golpe: tributaria, salud, pensiones, laboral, agraria, mientras prometió una segunda oleada entre las que se cuentan educación, predial, justicia y política. Las medidas relacionadas con la rentabilidad del capital y asociadas a la estabilidad macro -tributaria y plan de gastos- fueron aprobadas sin dilación. En cambio, las demás elevaron las alarmas del “fantasma del comunismo”, en tanto tratan de quitarle peso a las empresas privadas y dárselo al estado. Esto sucede especialmente con la propuesta de reforma a la salud, mientras la laboral propone reforzar la estabilidad de los trabajadores y sus posibilidades organizativas, siendo menores las distancias con la reforma pensional, reducida a fijar el tope de salario que marcará el paso entre el sistema público de prima media y el de ahorro privado, temas que hemos tratado ampliamente en la Revista Proletaria número 8.

De entrada, el gobierno sabía de las dificultades existentes para aprobar las reformas, dada su minoría en el Congreso, de allí que combinó dos formas de acción. Por un lado, procuró conciliar con los partidos menos cáusticos de la derecha, lo que explica ciertos nombramientos en ministerios como hacienda y educación. Del otro, buscó que su respaldo electoral se tradujera en movilización social en las calles, buscando encauzar en su favor y dándole así continuidad al descontento manifiesto en las protestas de 2019 y 2021, y esperando que esa fuerza presionara la aprobación de las iniciativas. Mientras la primera estrategia ha dado algunos pequeños frutos, la segunda no logró consolidarse tras tres intentos de forjar grandes movilizaciones.

Este último elemento es crucial para entender las potenciales proyecciones políticas del país, y se puede ilustrar en forma comparativa con las diferencias entre el ciclo de gobiernos progresistas de primera y segunda generación, como algunos lo califican. En el primero, los gobiernos lograron asimilar las luchas de los movimientos sociales y darles continuidad bajo su tutela, de modo que las masas movilizadas fueron un pivote importante para garantizar su gobernabilidad y sus programas. Tal fenómeno es menor en el segundo ciclo, y en el caso

de Colombia más bien ha tendido a debilitarse, tanto que incluso la ultraderecha ha sido capaz de competirle bastante bien en ese campo, logrando incluso fuerzas con las que ha estado cercando al gobierno.

El endeble vínculo del gobierno con las masas proletarias y populares no organizadas, ha generado una tendencia a gobernar mediante compromisos bajo subsidios. Por ejemplo, los motociclistas lograron acuerdos para congelar la tarifa del SOAT, los taxistas para suavizar el alza en el precio de la gasolina mediante subsidios directos, los transportistas de buses y camiones mantienen subsidios al diesel y a los peajes, y diversos sectores rurales y gremiales de los movimientos sociales organizados se movilizan en forma fragmentada y logran acuerdos y compromisos de presupuestos en su favor. La dificultad para el gobierno es que se dispersa su acción y la ejecución presupuestal, como lo ha puesto de manifiesto el director del DNP, a la vez que se compromete cuantiosas sumas de recursos, que fácilmente pueden superar los veinte billones de pesos, un poco más de lo que le entregó la reforma tributaria, monto de recursos contraído por el favor que le hace las Cortes a las empresas extractivistas al impedir la deducción de las regalías respecto de la base gravable, y que puede sumar unos siete billones para los tres próximos años.

Lo paradójico es que a ese tren del pedir subsidios y dineros del presupuesto público se ha querido subir el gran capital. Así por ejemplo el sector eléctrico aduce problemas en las tarifas, que el gobierno ha tratado de controlar, y mediante la generación de pánico ante una eventual crisis del sistema, le exige al gobierno la entrega de subsidios. De la misma forma proceden las EPS, que no sólo adversan la propuesta de reforma a la salud, sino que han pasado a exigirle al gobierno un incremento en el valor de la Unidad de Pago por Capitación-UPC, porque según sus cuentas es insuficiente para atender las obligaciones ya adquiridas para con cada uno de los pacientes asegurados, y a fin de lograrlo han posicionado en el ambiente nacional, con el favor de los medios de comunicación, que el gobierno los empuja a una crisis sistémica, razón por la cual ya no pueden entregar los medicamentos a los pacientes.





En este convulso escenario, el resultado negativo en el crecimiento del tercer trimestre cayó como un balde de agua fría para el gobierno. En su intento de manejar la situación ha acudido a la vieja conseja keynesiana de enfrentar los baches del capital incrementando la inversión pública, lo que sólo es posible si el Congreso modifica la camisa de fuerza que implica la regla fiscal, política que obliga a controlar los gastos del gobierno y sus déficits. Por lo pronto, la respuesta de los gremios es contradictoria, porque de un lado le exigen medidas al gobierno, mientras del otro le atan las manos para salir en su ayuda. Por eso es esperable que en la próxima reunión con los verdaderos dueños del país, los cacaos, broten noticias al respecto.

2. El Acuerdo Nacional ¿un movimiento hacia la derecha?

A los anteriores hechos se suman los errores y dificultades propias de un gobierno conformado por una aglomeración de pequeños partidos que pretenden hacer primar su propia y particular agenda.

Una de las dificultades se relaciona con la inestabilidad de los ministros, cambiando once de dieciocho en sólo diez meses, resultado en el que se mezclan incapacidades o reacomodamientos respecto de las primeras alianzas. También ha estado presente la demora en definir nuevos directores de algunas entidades del orden nacional, como el Invima, lo que denota falta de cuadros calificados dentro del Pacto. Además, no han faltado las torpezas en la socialización o implementación del programa político del gobierno, lo que ha implicado traspies y altercados entre los mismos representantes del gobierno, o zigzagueos y retrocesos caros a la confianza en el gobierno, como los referentes a la exploración y explotación de hidrocarburos.

Aquí no amerita abundar en los continuos desatinos y errores entre los directivos del gobierno. De ello se han encargado, como nunca, las empresas capitalistas de comunicación, que ejercen una investigación y fiscalización en tiempo real de cuanto contrato, intención

o pronunciamiento realiza el gobierno. Fue así como lograron identificar y sacar a flote el aprovechamiento personal de Nicolás Petro, hijo del Presidente, respecto de los recursos financieros de la campaña a la presidencia. Este caso, por su eventual gravedad, ha sido aprovechado por la ultraderecha, la Fiscalía, la Procuraduría y la prensa para acusar al gobierno de vínculos con la mafia y el narcotráfico, aspecto que ha funcionado bastante bien para desgastar su legitimidad.

En síntesis, el capital ha logrado contener y frenar las intenciones reformistas del gobierno, y esto da cuenta de cómo están realmente las cargas en el país. Sobre ello hay que tener presente que Petro se ha propuesto avanzar a un capitalismo que permita una transición energética y en la que el Estado tenga mayor peso, superando a la vez las fuerzas retardatarias del progreso capitalista, como puede ser el poder de terratenientes y gamonales con sus llamadas baronías electorales que someten regiones enteras, dominio que en muchas ocasiones mezcla capital, instituciones y paramilitares. Respecto a lo último, Petro lee al país como si fuese el de 1930, momento en el que el capitalismo se industrializaba y podía ser portador de fuerzas progresistas y modernizantes, perdiendo de vista los cambios estructurales de las últimas décadas que lo tornan en una fuerza regresiva.

No obstante, el gran capital interno y externo ve con preocupación las más que moderadas intenciones de reforma que pretende el actual gobierno progresista, y por eso golpea, desgasta, cerca y bloquea las iniciativas, en particular las que cursan en el Congreso. Como se ha comentado, esto se logra combinando el ataque virulento desde la ultraderecha uribista, con la condicionada conciliación desde la derecha. De allí que, por ejemplo, mientras la iracunda voz de Paloma Valencia no cesa de asustar a la población con el fantasma del castro-chavismo-comunismo, a su vez Santos, Gaviria, o Barreras instrumentalizan, entre bambalinas, los acuerdos. Y en ese contexto, las empresas capitalistas de comunicación juegan un papel tan o más poderoso que los mismos partidos, puesto que han sido los encargados





de deslegitimar, minuto a minuto, las iniciativas de Petro.

Con ello, la capacidad del gobierno y del Pacto Histórico-PH parece estar siendo rebasada, tal como lo han manifestado los resultados electorales regionales. Como se sabe el PH es la suma precipitada de varios partidos pequeños con poca trayectoria, de modo que cada uno procura sostener sus agendas particulares, lo que se evidenció en la dura puja interna por definir los candidatos y terminó por generar dispersión. Mientras esto sucedía, los partidos del capital se unificaron sin problemas, la ultraderecha (Centro Democrático, Conservador y Cambio Radical) fácilmente tejió alianzas con la derecha (Liberal, de la U, Verde), en todo el país, mediante el viejo expediente de garantizar la seguridad.

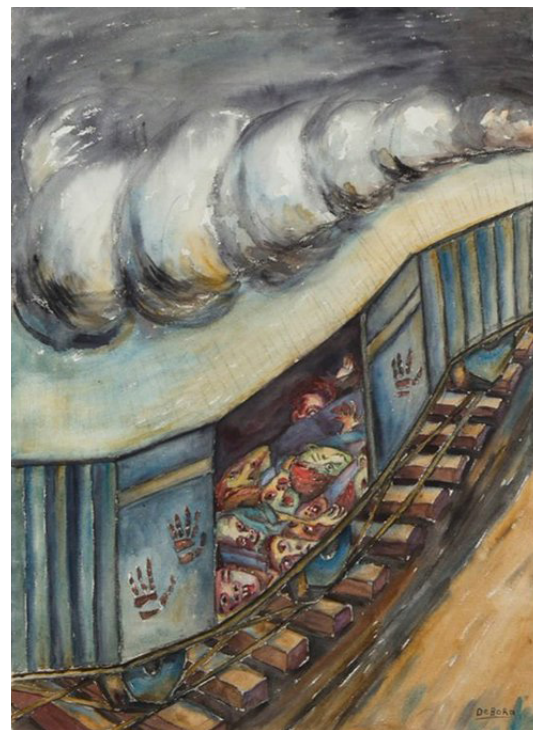
Es decir, se forjó lo que Marx llamó el partido del orden sobre la base del discurso de la seguridad ante el desborde de la delincuencia y la guerra; manera de proceder que ha cobrado fuerza desde las elecciones de 2001 que coronó victorioso al paramilitarismo con Uribe. Desde entonces, durante los meses de la campaña electoral resuenan en los medios de comunicación los casos de violencia, y así se justifica y legitima la mano dura, que por ejemplo promete el religioso elegido como alcalde de Bucaramanga, o el nuevo Concejal de Cali, quien se volvió famoso al enfrentar a bala a la población civil en las protestas de 2021.

Portanto, el ganador en las elecciones regionales pasadas es el partido del orden, consolidado a través de una serie de alianzas que gobernará en las principales ciudades y en la mayoría de gobernaciones, espectro del que no escapan algunas fuerzas que se proclaman cercanas al gobierno, pues sus victorias se produjeron con el mismo tipo de alianzas. Es decir, gana y se recompone el viejo "uribismo", (ultra-conservatismo) pero ahora diseminado por entre la sociedad y recompuesto entre los varios partidos con sus diversas alianzas. Por tanto, juzgando desde los resultados electorales, pareciera que el país retorna a los viejos cauces, los que de alguna manera fueron quebrados por las protestas de 2019 y 2021.

En este contexto, las dificultades se tornan crecientes, tanto que existe una discusión sobre una potencial crisis de gobernabilidad y la sostenibilidad del gobierno. Una crisis de gobernabilidad suele traer altos costos para el capital, en tanto que la incertidumbre política se manifiesta en abruptas devaluaciones que deprecian el valor de los activos y del dinero en el mercado mundial. Es por esto que, dada la magnitud del cerco y control sobre el gobierno, la misma ultraderecha parece desistir, por lo pronto, de planes tendientes a derribar al gobierno, tanto que el mismo Uribe ha aceptado una reunión con Petro para discutir el futuro de la reforma a la salud, encuentro que de seguro repercutirá sobre el potencial avance de las demás.

A su vez, parece que Petro había previsualizado el actual escenario, de allí que lleve meses insistiendo en forjar un Acuerdo Nacional. Esta figura tan socorrida explica su recurrencia en la historia política del país, identificándose en las elecciones de 1930, en el Bogotazo de abril de 1948, en 1957 con el Frente Nacional, o recientemente en la forma del gobierno de Santos. Así que bajo la propuesta de acuerdo nacional el gobierno amplía sus alianzas con fuerzas aparentemente progresistas que ganaron algunas gobernaciones y alcaldías para crear un contrapeso relativo a las fuerzas de ultraderecha, aunque esto le reste autonomía sobre la ejecución de su programa al tener que descansar en esas fuerzas su ejecución en las regiones (Revista Proletaria No 12). Además, está pendiente la reunión, este 21 de noviembre, con los grandes grupos económicos, que puede ser leída como la búsqueda de un New Deal en pequeño, donde el gobierno trencé en favor de los trabajadores algunos beneficios, pero suavizando los objetivos de las reformas y tal vez comprometiendo subsidios a los capitales, esto, mientras los dueños del país –los cacaos- le aseguren su permanencia, tal como aconteció con Samper, durante el proceso ocho mil, a inicios del 1997.

Ese tipo de potenciales acuerdos podrían concederle un extratiempo y legitimidad a los varios diálogos de paz que desarrolla el gobierno, puestos también en juicio por





las recientes votaciones. Al respecto, si bien han logrado ceses bilaterales al fuego, y se han instalado mesas de encuentro, lo cierto es que los avances reales son limitados, y las dinámicas propias de la misma guerra conspiran permanentemente en su contra, de modo que tienden a primar los bandazos, maximizados por las empresas capitalistas de propaganda puestas en su contra. A su vez, las mesas dan la impresión de reproducir un círculo vicioso en que se dialoga sobre cómo y qué se va a dialogar, siendo apenas diferencial el llamado a incluir a la sociedad civil con sus movimientos sociales organizados y sus gremios, aspecto en el que se presentan algunos avances, pero sin lograr aún poner en escena propuestas de contenido sobre un futuro alternativo para el país, objetivo fundamental de tales escenarios. Entre tanto, los niveles de guerra tienden a sostenerse debido a que la ultraderecha con sus paramilitares persiste en su propósito de ampliarse en el terreno, en especial en el más rural.

3. Cambiar el rumbo.

La profunda crisis que enfrenta el país irrumpió con fuerza en las protestas de 2019 y 2021 y cuando menos logró resquebrajar el régimen político autoritario forjado a inicios de siglo y facilitar el paso al gobierno progresista de Petro. Esta tendencia es la que parece ahora modificarse, si se juzga desde el reciente resultado electoral y por el avanzado cercamiento y control que recae sobre el gobierno y su agenda de reformas, tal que ahora prima la construcción de acuerdos con los dueños del país y el jefe de la ultraderecha. A fin de impedir que el país se deslice definitivamente hacia los viejos carriles ultraconservadores es necesaria una fuerte y sistemática acción desde la izquierda, tal que puedan hacer un contrapeso lo suficientemente fuerte para reposicionar la necesidad de una salida proletaria y popular a la crisis.

Pero, esa combinación de contracción económica, revés electoral del progresismo y regreso hacia los viejos cauces de la vida política del país también se manifiestan en cierto desencanto y frustración entre las masas proletarias y

populares. Esto sucede porque el rebrote organizativo y de las luchas evidenciado en las protestas de 2019 y 2021 no logró una continuidad organizativa, en especial si nos referimos a los espacios de las asambleas populares en el país, pero tampoco parece haberse concretado en organizaciones sociales más numerosas, mejor organizadas y dotadas de programas políticos de mayor calado y contenido. Más bien ese ímpetu de las masas fue canalizado hacia el campo meramente electoral e institucional, en particular mediante la participación en el gobierno, la confianza en las reformas de leyes, y con el encuentrismo, o eventismo, con el gobierno.

Si bien las condiciones se movieron en dirección a fortalecer las organizaciones sociales y las de izquierda a partir de nutrirse con mayores cantidades de masas activamente participantes, desafortunadamente desde el desarrollo del mismo Paro Nacional de 2021 las fuerzas se fueron inclinando hacia provocar meros cambios institucionales, los que si bien no salen sobrando en la medida que guardan algún potencial para el avance, de poco sirven cuando se pierden de vista los condicionamientos estructurales que dieron lugar a las protestas, pues son los que deben ser enfrentados de raíz mediante la formulación de propuestas alternativas con contenidos explícitos.

Aquí tal vez resida la mayor lección para el conjunto del proletariado y demás sectores de la clase popular en el momento presente, en el sentido de que fijar como objetivo central el asumir el gobierno, de un Estado capitalista, es más que miope y limitado, en tanto que el ejecutivo es apenas una parte del poder político. Como se ha tratado de ilustrar en estas notas para la coyuntura, es el capital con sus dinámicas mundiales y sus poderes nacionales el que impone las condiciones del juego, de modo que el gobierno poco determina en ese contexto. A ello se agrega que el capitalismo en países como Colombia enfrenta una situación de crisis en la que sus condiciones se degradan y retroceden, sin que sus representantes identifiquen cómo realmente relanzarlo, limitándose a reproducir el patrón de dependencia primario exportadora





y la sobreexplotación de los trabajadores, razón por la cual son una fuerza política altamente retrograda que impide dar pasos para salir de la crisis.

Además, el ordenamiento institucional juega muy en contra del poder del ejecutivo, del gobierno. En este sentido son más determinantes las decisiones del Banco de la República que las del Ministro de Hacienda, relación en la que Bonilla sólo pueda mendigar una baja en la tasa de interés. Y para no alargar, el gobierno está sitiado por la Fiscalía, la Contraloría, las altas Cortes, el bloque de partidos del capital -o partidos del orden- y los gremios, cuyos directivos amplifican sus quejas a toda hora por los micrófonos de las empresas capitalistas de comunicación.

Desde lo anterior, deberá ser más que comprensible que orientar las fuerzas transformadoras del proletariado y demás clases populares en la dirección de ganar el poder ejecutivo entraña un grave error político. Verdad es que bajo ciertas condiciones algunas alianzas tácticas con gobiernos progresistas pueden redundar en el fortalecimiento organizativo y político de fuerzas transformadoras, pero hay que tener siempre presente que esto implica un alto riesgo de neutralización, tal como ahora parece suceder en Colombia, y como se constata en casos como el de Argentina y otros países de la región. Por tanto, hay que insistir que el recurso fundamental con que cuentan las fuerzas transformadoras es la organización y movilización autónoma de la clase proletaria, las que dotadas de programas claros puedan decidirse a derrumbar las múltiples murallas que levanta el capital.

En este sentido, es necesario recuperar la dinámica organizativa forjada al calor de las luchas de 2019 y 2021, en especial los espacios de encuentro, debate y decisión a través de las asambleas populares, tema ampliado en la Revista Proletaria No 12. Bregar porque estos se reactiven y se tornen parte de la cotidianidad de los espacios de vida, estudio y trabajo de las diversas franjas del proletariado y demás sectores populares

se convierte en una tarea urgente y vital, si queremos contrarrestar el avance de la ultraderecha y el capital. Lograr este cambio de rumbo todavía es factible en la medida que la ultraderecha no ha regresado de pleno al comando político, y teniendo en cuenta que esto le puede convenir al actual gobierno, pues de radicalizarse sus dificultades deberá recurrir nuevamente a las masas para al menos sostenerse hasta agosto de 2026.//





Kilografía 20/25 "Libres como el viento"

C. Dalcaño

“SI DEBO MORIR”

REFAAT AL AREER

**Si yo debo morir,
tú debes vivir
para contar mi historia,
para vender mis cosas,
para comprar un trozo de tela
y algunas cuerdas,
(que sea blanco con una cola larga)
para que un niño, en algún lugar de Gaza...
mientras le mira a los ojos al cielo
esperando a su padre que se fue de repente
sin despedirse de nadie,
ni siquiera de su carne,
ni siquiera de si mismo,
vea la cometa, mi cometa que tú hiciste, volando arriba
y piense por un momento que un ángel está ahí,
trayendo de vuelta el amor.**

**Si debo morir
deja que mi muerte traiga esperanza
deja que sea un cuento.**

(El poeta, profesor de literatura y activista palestino Refaat Al Reer fue asesinado este 7 de diciembre en la Franja de Gaza, por las fuerzas genocidas de ocupación israelíes, junto a su mujer y sus seis hijos.)

